

**Oficio número TRANS-474/2024
Respuesta.**

Anónimo.
Presente.

En atención a la solicitud de información que presentó en la Plataforma Nacional de Transparencia de esta Fiscalía General del Estado, a la cual le fue asignado el número de folio 061903924000120, mediante el cual solicita:

"Buen día. Solicito a su dependencia información sobre la licencia oficial colectiva autorizada (vigente) por la SEDENA actualmente para la portación de armas de fuego a la Fiscalía General del Estado de Colima. Desagregando (de ser posible en formato editable .xlsx, .csv, .dbf o .dta) la información estadística de la cantidad de armas y cartuchos de fuego para el uso oficial de la Fiscalía autorizadas por: año, mes de adquisición, entidad, tipo de arma, tipo de cartucho, calibre, marca, modelo, país de procedencia y número de licencia colectiva. Adicionalmente, solicito se privilegie la entrega de información a través de medios electrónicos, de acuerdo con el Criterio 3/13, que establece que deberá otorgarse acceso a las bases de datos, en el formato en el que obren en los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre explotación, manipulación y reutilización de la información que contienen."

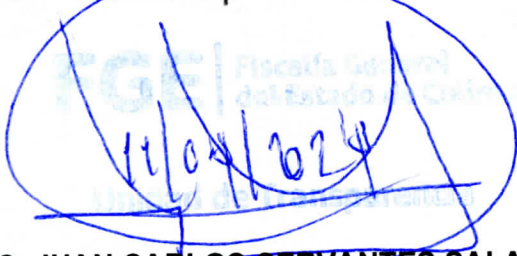
Con fundamento en lo establecido por los artículos 5, 10, 26 fracción VI, 57 fracción I, inciso a) y II a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, me permito informarle que:

Derivado de la naturaleza de la información que solicita, mediante mi similar **TRANS-285/2024**, fue remitida su solicitud a la **Dirección General de la Policía Investigadora** para dar el adecuado cumplimiento a la petición realizada, en atención a que dicha área es la responsable de generar la misma; en ese orden de ideas mediante oficio **FGE/DGPI/2066/2024**, suscrito por el Maestro Fernando Arturo Vega Alcaraz, en su carácter de **Director General de la Policía Investigadora** de la Fiscalía General del Estado de Colima, da respuesta a los planteamientos realizados; por tal motivo para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en la Ley, se adjunta al presente la información obtenida.

Con lo anterior, se da por cumplido, los extremos que se enmarcan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, observando el principio de máxima publicidad el cual implica poner a disposición de toda persona la información que se produzca en esta Fiscalía General.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 29 DE ABRIL DEL 2024.
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
LICENCIADO JUAN CARLOS CERVANTES SALAS



OFICIO: FGE/DGPI/2066/2024
ASUNTO: SE INDICA
Colima, Col., a 10 de abril de 2024

LIC. JUAN CARLOS CERVANTES SALAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Por medio del presente, en atención al oficio número **TRANS-0285/2024**, recibido el día 05 (cinco) de abril del presente año en el cual se me informa de la solicitud **061903924000120** en la cual, de manera anónima, solicitan lo siguiente:

"Buen día. Solicito a su dependencia información sobre la licencia colectiva autorizada (vigente) por la SEDENA actualmente para la portación de armas de fuego a la Fiscalía General del Estado de Colima. Desagregando (de ser posible en formato editable .xlsx, csv, dbf o .dta) la información estadística de la cantidad de armas y cartuchos de fuego para el uso oficial de la Fiscalía autorizadas por: año, mes de adquisición, entidad, tipo de arma, tipo de cartucho, calibre, marca, modelo, país de procedencia y número de licencia colectiva. Adicionalmente, solicito se privilegie la entrega de información a través de medios electrónicos, de acuerdo con el criterio 3/13, que establece que deberá otorgarse acceso a las bases de datos, en el formato en el que obren en los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre explotación, manipulación y reutilización de la información que contienen "

Respecto a lo anterior, le informo la siguiente:

Con fundamento en el artículo 110, 111, 114, 115 y 116 en su fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, dicha información ha sido considerada reservada, la difusión de la información permitiría que diversos grupos, con la finalidad de inhibir, menoscabar o bloquear las acciones específicas que se realizan para la investigación y persecución de los delitos, por lo cual, no es procedente permitir el acceso, la consulta y/o la reproducción de la información solicitada; no omito mencionar que la prueba de daños elaborada para la misma, ya fue valorada y confirmada la determinación de la reserva de información por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima en el Exp. **CTFGEC-028-2022**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.

FGE | **Fiscalía General
del Estado de Colima**

Dirección General de la Policía Investigadora

MTRO. FERNANDO ARTURO VEGA ALCARAZ.

EXP. CTFGEC-028-2022

- - - Colima, Colima a 20 de junio del año 2022, la suscrita C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia del oficio FGE/DGPI/3096/2022, suscrito por el Director General de la Policía Investigadora, en el cual se pronuncia sobre la reserva de información derivada de la solicitud de información realizada por "Héctor Sebastián Arcos Robledo", mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, radicándose mediante el folio 061903922000264, en la cual le solicita a la Fiscalía General del Estado información referente a:

"[...]"

h) Número de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército realizados;
"[...]"

- - - **VISTO** para **RESOLVER** la confirmación, revocación o modificación de la determinación sobre la reserva de información realizada por el Director General de la Policía Investigadora, y estando debidamente constituido el Comité de Transparencia, presidido por el C. Director General de Procedimientos Penales y con la participación del Director General de Servicios Administrativos y del Visitador General que lo integran, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, procede a realizar el estudio y análisis de la resolución administrativa que a continuación se presenta, y - - - - -

RESULTANDO

1. El día 02 de junio del año 2022 se recibió la solicitud de información realizada por Héctor Sebastián Arcos Robledo mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, radicada bajo el número de folio 061903922000264.
2. El día 13 de junio del 2022, por parte de la Unidad de Transparencia, mediante oficio TRANS-849/2022, fue solicitado a la Dirección General de la Policía Investigadora,

realizar los trámites necesarios para dar respuesta a la solicitud mencionada en el punto anterior.

3. Finalmente, mediante oficio FGE/DGPI/3096/2022, de fecha 17 de junio de 2022, el Director General de la Policía Investigadora declara la reserva de la información solicitada, respecto a "[...] h) **Número de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército realizados; [...]**", con el propósito de que en su caso se declare procedente confirmar, modificar o revocar la reserva parcial de la información solicitada.

CONSIDERANDOS

1. **COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, es el Órgano Colegiado competente para conocer de la reserva de información propuesta por la Dirección General de la Policía Investigadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y, los numerales 51, 53, 54 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que serán el Director General de Procedimientos Penales, el Director General de Servicios Administrativos y el Visitador General.

El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Director General de Procedimientos, o quien presida el Comité en su ausencia, tendrá voto de calidad.

Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los servidores públicos adscritos a su dirección que al efecto designen como sus representantes.

2. **ANÁLISIS DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.**

Del estudio del acervo documental y electrónico, así como la cronología y seguimiento administrativo instaurado por el sujeto obligado, se advierte que con fecha de recibido por este comité el pasado 20 de junio del año 2022, mediante oficio número FGE/DGPI/3096/2022, el Director General de la Policía Investigadora se pronuncia sobre la determinación de reserva de información, mencionando que:

**"OFICIO: FGE/DGPI/3096/2022
ASUNTO: PRUEBA DE DAÑO**

LICENCIADO JUAN CARLOS
CERVANTES SALAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
COLIMA.
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar se inicie el procedimiento de clasificación de reserva de información y en consecuencia formulare! correspondiente proyecto de resolución, toda vez que ésta dirección de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, ha determinado la reserva de la información solicitada de manera anónima con número de folio 061903922000264, presentada por medio del Portal Web de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual solicita:

- Numero de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército realizados.

En respeto al derecho humano de acceso a la información y al principio rector de máxima publicidad, cualquier autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, debe poner a disposición de toda persona, la información pública que tiene en su posesión, con las únicas excepciones que consideres la legislación aplicable.

De tal forma y en consideración al principio de excepcionalidad de la norma general, regulado por los artículos 106, 110, 111, 115 y 116, FRACCION IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mismos que se transcriben de la siguiente manera.

Artículo 106.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública solo será restringido en los términos de lo dispuesto por la presente Ley, de acuerdo a las normas que plantean para el tratamiento de la información reservada y la confidencial" [...]

Artículo 110.- Los sujetos obligados deberán resolver respecto del carácter reservado o confidencial de la información que obre en su poder [...]

Artículo 111.- La prueba de daño a que se refiere el artículo anterior tendrá como objetivo justificar de que de divulgarse la información se generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público; que el riesgo de entregar información es mayor que las ventajas de su difusión y que la medida representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio que se causaría con la entrega de la información. [...]

Artículo 115.- Los sujetos obligados calificarán la reserva de información a través de la aplicación de la prueba de daño en los términos que al efecto dispone la Ley General y esta Ley. La información reservada se sujetará al principio de excepcionalidad. [...]

Artículo 116.- Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten.

En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

[...]

IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Y sus correlativos de la Ley General de Transparencia y acceso de la Información Pública, contenido en las fracciones VII del artículo 113, que a la letra dice:

Artículo 113.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

VI.- Obstruya la prevención o la persecución de los delitos

Los cuales, en su requerimiento relativo al número de exámenes de Licencia Colectiva para portación de arma de fuego, guardan relación con lo estipulado en el artículo 56, párrafo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales transcribo de la siguiente manera:

ARTICULO 56.

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

Esta Dirección General de la Policía Investigadora determina que, la información requerida, es de catalogarse como reservada, atento a lo establecido en los numerales antes invocados y la motivación que a continuación pongo a su consideración:

Dar a conocer la información del número de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército realizados, no se daría cumplimiento a lo establecido en el numeral 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establece como confidencial, así también se pone en riesgo la operatividad y el cumplimiento a las atribuciones que le han sido conferidas de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos; así como prevenir la comisión de delitos, intervenir en materia de seguridad pública y verificar la observancia y cumplimiento de las leyes, en razón de ello, proporcionar información relacionada al número de exámenes de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de arma de fuego se da a conocer el estado de fuerza de ésta Policía Investigadora, toda vez que su divulgación se traduciría en un insumo de utilidad para los grupos delictivos que permitiría incrementar la posibilidad de que las organizaciones delinquentes y les permitirá determinar el nivel o capacidad de análisis y respuesta de la Policía Investigadora ocasionando un riesgo para el cumplimiento de sus objetivos.

Por lo anterior, y atento a lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, normatividad de observancia general en el Estado, aplicable a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los municipios, dentro de los cuáles se encuentran las Instituciones de Procuración de Justicia que desarrollen funciones de seguridad pública. Esta Dirección General de la Policía Investigadora, clasifica la información concerniente a la solicitud en mención de naturaleza reservada.

Circunstancias que encuadran en la hipótesis contenida en el artículo 116, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus correlativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y sus correlativos de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, contenido en la fracción VII, del artículo 113, artículo 106 numeral 4, 5 fracción IV de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima, así como lo establecido en el artículo 218 del código Nacional de Procedimientos Penales.
[...]

3. ANÁLISIS DE LA RESEVA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la **clasificación de información reservada** emitida por la Dirección General de la Policía Investigadora, obedece al cauce natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que rige nuestras actuaciones.

En éste sentido para mejor proveer en la argumentación del asunto en cuestión, es indispensable establecer los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la información pública, mediante procedimientos sencillos y expeditos, pero al mismo tiempo vigilar la protección de los **datos personales en posesión de los sujetos obligados**, así como la **información reservada o confidencial**, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir **proactivamente**, todos ellos son elementos que debemos de **ponderar** en la solución y respuesta a los planteamientos concretos de la ciudadanía en las solicitudes de información.

Luego entonces, para poder arribar a una resolución administrativa en donde exista una motivación y fundamentación adecuada, que reúna con suficiencia y razonabilidad legal, las argumentaciones jurídicas en las que se sustenta la presente determinación, partiremos de un análisis de los argumentos expuestos por Dirección General de la Policía Investigadora, ponderando a la luz de los derechos fundamentales de acceso a la información que le asisten a la solicitud, las facultades y obligaciones de los sujetos obligados.

Lo anterior, partiendo de criterios objetivos y razonables, comenzaremos a asimilar una serie de precedentes interpretativos que nos permitan allegarnos de los elementos necesarios para que este Comité, se encuentre en condiciones legales de resolver respecto de la clasificación de la información, tal como se establece en la

literalidad del artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Por lo tanto, que este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, en un ejercicio de estudio y análisis de los solicitado por Héctor Sebastián Arcos Robledos, pondera con sumo cuidado **la clasificación de información reservada**, realizada por el Director General de la Policía Investigadora, por el periodo máximo de cinco años, en atención primordialmente a las siguientes consideraciones:

Circunstancialmente, este Comité de Transparencia determina que, temporalmente no es procedente permitir el acceso, la consulta y/o la reproducción de la información solicitada a la Dirección General de la Policía Investigadora, toda vez que esta debe ser considerada y tratada excepcionalmente como de acceso restringido, con el carácter de información reservada. Por tal motivo, por el momento queda estrictamente prohibida su difusión, publicación, reproducción y/o acceso a persona alguna, con excepción de las autoridades competentes. Dicha limitación deviene del cumplimiento a lo establecido en la fracción IV el artículo 116 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, ya que la información si bien existe y forma parte de los archivos administrativos de esta Fiscalía General del Estado, también lo es que atendiendo al caso en particular aplica la limitante establecida en el artículo referido en supra líneas, que a la letra dice:

Artículo 116.- Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten. En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

[...]

I. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[...]

Con lo anterior se encuadra la solicitud que nos ocupa entre la información considerada como de carácter reservado en razón de que de divulgarse dichos datos

esto obstruirá la prevención o persecución de delitos, sin embargo, en la misma Ley referida en supra líneas en su artículo 110 establece que la información tendrá carácter de reservado por un periodo de cinco años, el cual podrá ser ampliado por este Comité por otros cinco años adicionales.

De los preceptos legales transcritos se dependen un tema de suma relevancia; las excepciones legales establecidas por la Ley, sobre la información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las dispensas de publicidad, que para el caso que nos ocupa, hacen referencia a la información que de ser difundida podría generar una obstrucción en la prevención o persecución de los delitos.

Ahora bien, se entiende que, con la clasificación de la reserva de cualquier información que se considere que de ser exhibida puede obstruir la prevención o persecución de delitos, el legislador pretendió cumplir con el mandato constitucional y convencional al precisar cuáles son los supuestos normativos que por razones de interés y orden público deben establecerse en la ley como excepciones y restricciones al derecho de acceso a la información. Para tal efecto el legislador pretende asegurar el acceso a la justicia y a la seguridad pública al dejar en los sujetos obligados la facultad de utilizar su criterio a consideración para reservar información que pudiera afectar dichos principios, caso en el que nos encontramos donde las facultades de la Fiscalía General del Estado tienen dentro de sus principales objetivos la prevención y persecución de los delitos, por lo que los titulares de las áreas integrantes de dicho órgano público, son colaboradores en proteger la información que pudiera afectar sus actividades, como lo es el presente caso.

Debemos tomar en cuenta que atendiendo al postulado de que la reserva de información es temporal y no definitiva, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el numeral 101 dispone que la información clasificada como reservada según el artículo 113, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años y , excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación del Comité de Transparencia, pueden ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

De esta forma, se advierte que a la solicitud realizada por quien se identifica como "Héctor Sebastián Arcos Robledo", le deviene un limitante legal para que dicha información contenida en los archivos administrativos sea reproducida fuera de la Institución.

En este orden, es posible señalar que, como limitante al derecho de acceso a la información pública, interpretado por nuestro máximo tribunal de control constitucional, se encuentra la restricción al ejercicio del derecho a ser informado; cuando el objeto sea la protección o salvaguarda de derechos o bienes jurídicos tutelados a favor de terceros que, lejos de limitar el acceso a la información pública lo garantiza, puesto que el mismo también entraña la protección de los intereses nacionales, como lo es la seguridad pública, así como el respeto a la privacidad y otros derechos a favor de los gobernados.

De esta forma, coincidiendo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, y como toda prerrogativa tiene sus limitantes, tal y como se mencionó, el numeral 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, en principio, toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

De esta forma, el razonamiento señalado anteriormente se robustece con el contenido de la siguiente Jurisprudencia:

Registro digital: 191967

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: P. LX/2000

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 74

Tipo: Aislada

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que

se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Desde esta perspectiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó que el hecho de que las leyes secundarias restrinjan temporalmente el acceso a información pública, no constituye una violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el ejercicio de este derecho no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan, entre otros, en la protección de la seguridad nacional, así como la protección a los intereses o derechos de terceros; de acuerdo con la siguiente Tesis:

Registro digital: 169772

Instancia: Segunda Sala

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 2a. XLIII/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 733

Tipo: Aislada

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas

ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

De esta forma, considerando los argumentos expuestos por la Dirección General de la Policía respecto de los riesgos que derivarían de exponer el número de exámenes de licencia colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, este órgano colegiado considera que la prueba de daño remitida por el área generadora y poseedora de la información satisface el deber de protección y la manera menos restrictiva para el solicitante.

Es importante destacar que su clasificación es temporal, esto es, en tanto subsista la necesidad legal de mantenerla en reserva; de manera que una vez que transcurra la periodicidad establecida en el artículo 110, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, podrá realizar nuevamente la solicitud de dicha información, con excepción de que se determine la ampliación del plazo derivando de la presente resolución.

Además, como ya se mencionó, las causales que motivan la reserva planteada por la Dirección General de la Policía Investigadora, consisten en que la información solicitada es relevante para las actividades de esta Institución en el cumplimiento de la prevención y persecución de los delitos; luego entonces los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, que tiene por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, establece en los numerales Décimo octavo y Vigésimo sexto lo siguiente:

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y

los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

Es así que encontramos que la petición de información consistente en "[...] h) Número de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército realizados; [...]" no puede ser proporcionada en los términos solicitados, ya que se reitera que aunque dicha información forma parte de los registros administrativos de esta Institución, se considera que los datos solicitados son clasificados como reservados, esto en razón de que de ser difundidos perjudicarían su propia finalidad dentro de las funciones de la Fiscalía General del Estado, ya que facilita la deducción de la capacidad de los cuerpos policiacos que se enfrentan a individuos o grupos criminales, quienes pueden conocer la información que se solicita y pretender sobrepasar la capacidad del equipamiento de esta Institución, bajo este contexto es por lo que se motiva reservar la información fundamentado en la Ley General de Transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y los Lineamientos General en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, donde de forma expresa manifiestan la imposibilidad del otorgamiento de la información que se solicita.

De esta forma, conforme al procedimiento que este sujeto obligado debe observar para negar información, es necesario satisfacer los requisitos que la ley de la materia de transparencia señalada y establece en su numeral 111, consistente en que se deberá justificar que la información solicitada se encuentra en alguna de las hipótesis para clasificarla como protegida, y de la cual, es evidente que con su difusión pudiese ocasionarse un daño o perjuicio irreparable, ya que el daño al ser publicada resulta ser mayor, atendiendo al interés público de dar a conocer esta información, por lo que debe dimensionarse la importancia de su publicación y que si bien es un derecho de los ciudadanos el acceder a la información pública de libre acceso, también deberá considerarse lo contemplado por la ley en donde indica que no toda la información debe ser pública de libre acceso. Así pues, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos en el cuerpo del presente instrumento, este Comité de Transparencia arriba a la conclusión para determinar que autorizar la consulta y/o entrega de la información requerida, produce los siguientes:

DAÑOS

DAÑO ESPECÍFICO: Se hace consistir, principalmente, en la inobservancia e incumplimiento de obligaciones a las que debe sujetarse esta institución en materia de seguridad pública, así como en la violación a principios y bases que debe aplicar en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, propiamente en la protección de información considerada como reservada.

DAÑO PRESENTE: Este se configura desde el momento en que se autoriza su consulta, ya que se violaría los impedimentos de proporcionar dicha información, establecido en el artículo número 113 fracción I y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales décimo octavo y vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; por lo cual se considera como información reservada, en correlación con el numeral 116, fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

DAÑO PROBABLE: Este se hace consistir en el posible aprovechamiento que se le pudiese dar a dichos registros respecto de los exámenes realizados de licencia oficial colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejercito, con lo cual

se podría deducir la capacidad de equipamiento de armas con el que cuentan los cuerpos policiacos que laboran para la Fiscalía General del Estado de Colima, información que de ser conocida por los sujetos o grupos criminales facilitaría que estos pretendieran superar la capacidad de esta Institución, creando un perjuicio en las actividades de prevención y persecución de los delitos derivando en una afectación a la seguridad pública que deben gozar los ciudadanos.

Por lo tanto, se acredita la excepcionalidad a la norma general y el principio recto de máxima publicidad, regulado por los artículos 106, 110, 111, 115 y 116, fracciones X y XI, 122 y 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por tratarse de información que afecte la prevención y persecución de los delitos, así como la seguridad pública, y por la otra por tener ese carácter en atención a lo establecido en el artículo 113 fracción I y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo octavo y vigésimo sexto de los Lineamientos General en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; artículo 116 fracciones I y IV la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 28, 51, 52, 53, 54, 110, 112, 116, 128 y 129, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Colima, este comité de Transparencia:

RESUELVE

PRIMERO: Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, es el órgano colegiado competente para conocer de la presente clasificación de información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 6º, y 16 de Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículo 1º fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, 116, 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Colima. - - - - -

SEGUNDO: Este comité de trasparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, confirma la clasificación de información reservada referente a: "[...] h)

Número de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército realizados; [...]", decretada por la Dirección General de la Policía Investigadora, por el periodo máximo de cinco

años de conformidad con el artículo 110 párrafos tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima en virtud de la naturaleza de la información.-----

TERCERO: El Solicitante de la información o, en su caso, los particulares que se consideran afectados por los actos, omisiones o resoluciones de los sujetos obligados, podrán interponer, por sí mismo o a través de su representante, ante el organismo Garante o ante la Unidad de Transparencia, el recurso de revisión previsto por el artículo 148 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Colima.-----

CUARTO: Notifíquese la presente resolución a la Unidad de Transparencia, para los efectos legales a que haya lugar.-----

NOTIFÍQUESE AL SOLICITANTE.-----

Así lo resolvió y firman el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, por unanimidad de votos de su presidente, Lic. Raúl Ramírez Flores, Director General de Procedimientos Penales, Lic. Luis Alejandro Almaraz Alcaraz, Director General de Servicios Administrativos y Lic. Fernando Gutiérrez Fuentes, Visitador General. - - -

- - - Licenciada Cynthia Rocío Flores Vázquez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima, quien autoriza y da fe.

LIC. RAÚL RAMÍREZ FLORES

Director General de Procedimientos Penales

LIC. LUIS ALEJANDRO ALMARAZ ALCARAZ

Director General de Servicios Administrativos

LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ FUENTES

Visitador General

LICDA. CYNTHIA ROCÍO FLORES VÁZQUEZ

Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado de Colima

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolución del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Colima No. **CTFGEC-028-2022**.